

## Sapoá desnuda a la contra

La firma de acuerdo de Sapoá a finales de marzo entre el gobierno de Nicaragua y "la contra," ha producido dos resultados importantes: el respiro que ha dado a todos el cese del fuego temporal y los renovados intentos por hacer definitivo lo que hasta ahora ha sido sólo temporal.

La tregua se hizo sentido en el país como algo novedoso, pero sabiendo que no podía durar. La novedad se sintió más en las zonas de guerra, donde los civiles circularon con alivio porque no iban a ser víctimas de emboscadas ni de fuego cruzado. Los familiares visitaron sin temor a sus parientes enlistados en ambos ejércitos. En el hospital de Estelí no se trató a nadie por traumatismos de guerra durante varias semanas, desde que se detuvo el fuego. Tampoco hubo entierros diarios como antes de la tregua. La artillería dejó de oírse.

En estas regiones los contrarrevolucionarios estuvieron descansando a poca distancia de las tropas gubernamentales. Cuando se encontraban se saludaban sin temor a ser agredidos. Los oficiales nicaragüenses tomaron la iniciativa en establecer estos contactos con los jefes y la tropa rebelde. Pero la dirigencia de éstos, temerosa de que se produjeran

deserciones masivas, prohibió tales encuentros y ordenó disparar a quien se aproximara, aunque fuera un civil desarmado. Pero esta situación duró sólo hasta julio.

Los periodistas vieron a "los contras" en forma y con buena moral, lo cual contradice los informes de Washington que afirmaban que miles de rebeldes hambrientos y desmoralizados se habían retirado a Honduras buscando protección. A. Calero también desacreditó los informes alarmistas de la Casa Blanca y negó que sus gentes se hubieran convertido en refugiados de guerra después de Sapoá. Aparentemente "los contras" se conservaban en tan buenas condiciones gracias al apoyo de los campesinos y a su conocimiento del terreno.

Al vencerse el primer plazo del cese del fuego el 30 de mayo, el gobierno declaró una prórroga unilateral de 30 días, hasta el 1 de julio, al no poder comprometer a "los contras" a continuar con este compromiso. El jefe militar de "la contra," Enrique Bermúdez, ex-coronel de la Guardia Nacional somocista, se opuso a mantener el cese del fuego, alegando que éste favorecía al gobierno. Lo mismo dijo el gobierno de Estados Unidos. Sus funcio-

narios ratificaron a las afirmaciones de Bermúdez.

Los "contras" aceptaron a regañadientes la ampliación temporal del cese del fuego. Estos no podían arriesgarse a romper el fuego sin tener garantizada la ayuda militar norteamericana, cosa difícil de conseguir legalmente por ahora. En este sentido, el congreso norteamericano dio una ligera oportunidad para que se pudiera alcanzar un acuerdo político. Además, "los contras" necesitaban tiempo para reponerse del último devastador ataque del ejército nicaragüense. Al gobierno de Nicaragua tampoco le interesaba disparar primero y ha estado haciendo todo lo posible para extender el cese del fuego. Si bien ha amenazado con una ofensiva general y devastadora si fallan las conversaciones, y aparentemente ha estado preparándose para esa eventualidad, no disparará primero por la cada vez más inestable y endeble economía y por el costo político de relanzar la guerra. Los congresistas norteamericanos han advertido al gobierno que si disparan primero reconsiderarían de inmediato renovar la ayuda militar a "la contra."

El gobierno de Nicaragua ha hecho renovados esfuerzos por comprometer a "la contra" en el proceso de paz iniciado a finales de marzo pasado, incluso cediendo en puntos en los cuales, inicialmente, había dicho que no cedería. En este sentido ha aceptado discutir la posibilidad de cambios estructurales en el sistema político. Este cambio de postura obedece también a que se ha convencido de que puede tolerar cierta oposición política sin arriesgar el poder estatal. Por su parte, "los contras" se comprometieron a entrar en las zonas de cese del fuego mientras se iniciaban las negociaciones políticas. Esto supondría su desaparición como grupo armado. Pero luego pareció que "los contras" se arrepintieron de haber firmado el primer compromiso porque han estado dando largas, evitando concretar el acuerdo de Sapoá. Y es que, además, concretar y llevar a su cabal cumplimiento el acuerdo de Sapoá implicaría que Estados Uni-

dos tendría que llegar a un entendimiento con una revolución a la cual no ha podido derrotar.

Desde finales de marzo se han tenido dos tipos de reuniones entre "los contras" y el gobierno: unas técnicas y otras de alto nivel. El objetivo de las cuatro reuniones técnicas era fijar las siete zonas donde debían recluirse los rebeldes y determinar su modo de operación. En efecto, en esas reuniones se llegaron a delimitar las siete zonas las cuales cubrían 21 mil kilómetros cuadrados, y en las cuales solo hay población dispersa. La "contra" llegó a pedir 36 mil kilómetros cuadrados, incluyendo las ciudades de Estelí, Jinotega y Ocotal.

A mediados de abril el gobierno suspendió estas reuniones y pasó su agenda a las conversaciones de alto nivel. "Los contras" tenían la pretensión de convertir estas zonas en zonas "liberadas," resultando así imposible determinar su modo de operación (seguridad, suministros y verificación). "Los contras" pretendían seguir recibiendo armas y municiones e incluso asumir el control total de las mencionadas zonas, lo cual, además de contradecir el compromiso firmado, lesionaría la soberanía nacional.

"Los contras" propusieron, por otro lado, que mientras ellos podían seguir armándose, el gobierno debería dejar de recibir ayuda militar durante la tregua de 60 días. El gobierno en cambio, les permitiría conservar sus armas, pero no recibir nuevas ni abastecimientos militares. Otro grave obstáculo en estas conversaciones fue la determinación del organismo neutral responsable de distribuir la ayuda humanitaria donada por el gobierno norteamericano. En estas conversaciones la delegación rebelde no se presentó con plenos poderes como lo hizo la gubernamental. Siempre advirtió que las decisiones debían ser ratificadas por su directorio y su asamblea. Habían escarmentado con la firma del acuerdo de Sapoá y no estaban dispuestos a repetir tan incómoda situación.

Al fracasar la comisión técnica se retrasó el calendario establecido en Sapoá; el gobierno, en consecuencia, no continuó con la liberación de los presos políticos ni se incorporaron los ocho dirigentes rebeldes al diálogo nacional moribundo. El diálogo nacional no ha podido avanzar porque está aún pendiente el conflicto militar. Hasta su última suspensión (la tercera) el 28 de abril, había habido 23 sesiones en las cuales no se han logrado acuerdos sustanciales. El gobierno ha acusado a la oposición política de retirarse del diálogo aduciendo diferentes pretextos y de evadir la discusión de los puntos serios. En cambio la oposición política ha acusado al gobierno de incumplimiento de su promesa de hacer reformas políticas sustanciales.

En Managua se han tenido cuatro encuentros de alto nivel (el 15 y 25 de abril, el 12 de mayo y el 8 de junio) en siete semanas, presididos por el ministro de defensa, H. Ortega, y por A. Calero, en los dos primeros, y A. César en los dos últimos.

Estos encuentros han sido anteceditos por una fuerte retórica de ambas partes. "Los contras" pospusieron los encuentros regateando condiciones, pero al final, se presentaron a la cita. Han regateado incansablemente sobre el sitio de la reunión. Primero pidieron Managua y se les concedió. Como no les fue bien ya no quieren reunirse en la capital. Exigieron alojamiento en un lujoso hotel céntrico para sus casi multitudinarias delegaciones, moverse libremente en la capital, visitar a la oposición política interna, e incluso dar una recepción al cuerpo diplomático. "Los contras" se han querido presentar como dirigentes que regresan triunfantes del exilio y han querido hacer de las pláticas una campaña política. El gobierno se ha negado a estas pretensiones; sin embargo, les permitió visitar *La Prensa*, reunirse con la conferencia episcopal y con la Coordinadora Democrática Nicaragüense en sus respectivas sedes en varias ocasiones. En estas reuniones "los contras" nunca han firmado nada y siempre han abandonado la capital amenazando con no re-



gresar, pero hasta ahora siempre han vuelto. Al salir han protestado por el trato dado por la policía a unos huelguistas, por la forma estricta de aplicar la ley de medios de comunicación y, en general, por lo que llaman falta de democracia. Han usado estos argumentos para justificar su rechazo a cualquier clase de compromiso por escrito con el gobierno.

Para el gobierno, aceptar Managua como sitio de las conversaciones de alto nivel fue un trago amargo, pero "en la medida en que se logre la paz, el pueblo sabrá asimilarlo y aplaudirlo" (H. Ortega). Para neutralizar la incomodidad y el disgusto producidos por la presencia de "los contras" en Managua, el gobierno movilizó a sus organizaciones de masas e hizo fiestas populares en las calles. En una ocasión centenares de manifestantes con pancartas del tipo "O se rinden o se mueren," se concentraron a una distancia prudencial del hotel donde estaba "la contra."

En el primer encuentro de alto nivel, "los contras" pidieron sacar de las zonas a los campesinos de los reasentamientos, quienes durante la guerra han sido constantemente atacados por "los contras." Asimismo pidieron que los campesinos desplazados que los han apoyado pudieran vivir en dichas zonas fuera del alcance de las autoridades gubernamentales. Aparentemente así esperaban estrechar sus vínculos con ellos. Exigieron la reposición de toda la munición que emplearan en sus "ejercicios" o en acciones defensivas mientras estuvieran en las siete zonas. Estas

debían estar fuera del alcance de la artillería nacional. Pidieron que la ayuda humanitaria les fuera entregada por aire y desde aviones comerciales alquilados.

Nicaragua propuso que la ayuda humanitaria fuera entregada por una organización neutral (no norteamericana) y que no incluyera equipo de comunicaciones que pudiera tener uso militar (1.5 millones de dólares de la donación norteamericana estaban destinados a esta clase de equipo).

Después de 4 días de reunión el único acuerdo fue el de volverse a reunir. "Los contras" salieron exigiendo pasos concretos en favor de los que vagamente llaman la democratización para poder aceptar firmar un cese del fuego. El gobierno acusó a la línea militarista, representada por E. Bermúdez y A. Sánchez, de este fracaso y notó que a estas conversaciones no asistieron los 11 jefes militares rebeldes que estuvieron en Sapoá a principios de abril. A. Calero salió al paso argumentando que habían estado presentes cuatro de los cinco dirigentes del directorio de la Resistencia Nicaragüense, máximo organismo directivo.

En su visita a la conferencia episcopal, los obispos pidieron a "los contras" liberar a los secuestrados que estaban en su poder. Calero dijo desconocer su número, pero prometió liberarlos. El presidente Ortega, por su parte, anunció que no saldría libre ningún exguardia somocista mientras "la contra" no liberara a los secuestrados.

En la segunda reunión de alto nivel "los contras" abandonaron su exigencia de recibir suministros militares y el que las autoridades nicaragüenses se mantuvieran fuera de las zonas de reclusión. El gobierno estaba interesado en conseguir acuerdos globales que incluyeran un cese del fuego definitivo, pero "los contras," en cambio querían acuerdos parciales. Sin embargo, no se logró ni lo uno ni lo otro.

"Los contras" no aceptaron que la Cruz Roja Internacional les distribuyera la ayuda

humanitaria alegando que eso significaría poner a sus tropas a nivel de refugiados. Pese a ello, insistieron en su preocupación por el hambre que estaban pasando los rebeldes. Al final de esta segunda sesión, la delegación rebelde mostró una inusual reserva. Curiosamente, antes de la reunión, en Miami, el gobierno y "los contras" habían establecido áreas de interés común.

A pesar de que encontraron 16 coincidencias no firmaron ningún acuerdo en Managua. Eso sí, acordaron volver a reunirse a mediados de mayo. Las coincidencias se consiguieron de una propuesta de 32 puntos presentada por el gobierno.

Asimismo se negaron a extender el cese de fuego, el cual vencía el 30 de junio. En esta reunión el directorio se negó a comprometerse con la libertad de los civiles prisioneros. A finales de mayo, Bermúdez aclaró que solamente tenían 66 prisioneros, todos ellos soldados sandinistas, y ninguno de ellos secuestrado. De esta forma, Calero no cumplió su promesa con los obispos nicaragüenses.

A la tercera reunión de alto nivel "la contra" se presentó presidida por A. César y E. Bermúdez, quien por primera vez se sentaba en la mesa de negociación. En esta oportunidad, también por primera vez "los contras" presentaron una propuesta global: en 5 días el gobierno debía declarar una amnistía inmediata, irrestricta libertad de prensa y suspender el reclutamiento militar. En la segunda parte de su oferta proponían que en dos meses a partir de la firma del convenio y en el marco del diálogo nacional se estableciera un marco jurídico para la democratización.

El gobierno aceptó discutir los puntos propuestos, incluido el cambio de estructura del ejército y la policía, suprimiendo el control del partido sobre ellos. El gobierno ofreció reducir la influencia de los comités de defensa sandinista y de las otras organizaciones de masas; aceptó suspender la difusión de la ideología sandinista entre los reclutas, y garantizar el derecho de huelga. La

posición del gobierno fue más flexible que antes en cuanto a discutir los cambios políticos, pero los acuerdos se tomarían en el diálogo nacional, donde están representados los partidos de la oposición.

El gobierno por su parte, presentó una agenda de cinco puntos para ser discutida en tres meses a partir de comienzos de septiembre. La agenda incluye garantía en los procesos electorales, reforma electoral y cédulación, definición de la fecha de los comicios, participación de los partidos sin representación parlamentaria, discusión del sistema de economía mixta y libertad de los prisioneros en poder de "la contra."

"La contra" rechazó la propuesta del gobierno de prolongar las conversaciones dos días más para avanzar en las discusiones. El gobierno quería un compromiso de detener el fuego hasta el 30 de junio, que la ayuda humanitaria fuera distribuida por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, un organismo dependiente de la OEA. "La contra" se negó a ambas cosas.

Cuando "los contras" se negaron a firmar un comunicado conjunto, según los informes de la prensa, H. Ortega los llamó cobardes, vacilantes, incapaces de tomar decisiones y animales.

La cuarta sesión de alto nivel se inició el 8 de junio. Ambas delegaciones discutieron sobre los cambios necesarios en Nicaragua para que "los contras" abandonaran las armas. El gobierno propuso un calendario y un procedimiento detallado para ello. Tras la firma del acuerdo definitivo serían puestos en libertad 200 exguardias que hubieran sido exonerados de crímenes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En siete días las tropas del gobierno se retirarían de las zonas destinadas para concentración de los rebeldes, quienes tendrían 20 días para concentrarse. Al verificarse este paso y a partir del 12 de julio comenzaría la entrega de la ayuda humanitaria a través de la Fundación Panamericana para el

Desarrollo. Asimismo, "la contra" enviaría a sus ocho representantes al diálogo nacional y en ese momento el gobierno dejaría en libertad a 1.150 "contras." El 12 de julio comenzaría un período de 60 días durante los cuales se discutirían, en el diálogo nacional, los 10 puntos para el perfeccionamiento de la democracia (pluralismo político incluyendo el respeto a las etnias, separación de los poderes del Estado, igualdad de los ciudadanos ante la ley y pleno respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, asociación y reunión, igualdad de derechos y oportunidades de todos los partidos ante la ley, instituciones estatales al servicio de los intereses nacionales, derecho a huelga y libertades sindicales, garantías procesales, sistemas electoral pluralista, garantías para la economía mixta).

Al llegar a estos acuerdos, el 11 de septiembre, comenzaría el desarme de "los contras" en las zonas, el cual concluiría el 10 de octubre. Entonces el gobierno liberaría a la otra mitad de "los contras" presos. La novedad de esta propuesta gubernamental radica en que el desarme sería posterior a los acuerdos políticos.

El gobierno también propuso que la Resistencia Nicaragüense permitiera a la comisión verificadora o a la Cruz Roja Internacional constatar el número e identidad de las personas secuestradas en sus campamentos u bases, y entregar a los 66 prisioneros que aceptaban tener en su poder.

La nueva propuesta nicaragüense desconcertó a los negociadores "contras." Entonces aparecieron posiciones diversas y encontradas entre ellos. El gobierno presionó inútilmente hasta el último momento para conseguir un acuerdo mínimo. La reunión terminó sin fijar fecha para el siguiente encuentro. Faltando dos horas para concluir las conversaciones, "los contras" presentaron otra propuesta con nuevas demandas orientadas al desmantelamiento del gobierno revolucionario: disolución de la corte suprema de jus-

ticia y nombramiento de nuevos magistrados de acuerdo con la oposición; nuevas leyes de medios de comunicación y de partidos políticos, elección de una asamblea constituyente antes del 31 de enero de 1989. Querían además que el gobierno permitiera a los reclutados abandonar libremente el ejército y a la Resistencia Nicaragüense abrir oficinas en Managua. "La contra" no quiso ampliar la reunión para discutir su propia propuesta. El documento "contra" era más un documento de despedida que para negociar.

El jefe de la delegación "contra" A. César, acusó al gobierno del fracaso al no comprometerse a nada concreto en orden a la democratización. Reforzó su queja con lo que llamó "acciones represivas" gubernamentales, o sea, detención de más de una docena de políticos de la oposición que sin permiso policial salieron en manifestación para entregar una carta de protesta a la asamblea. Los detenidos fueron liberados poco después. El gobierno, por su parte, explicó que las conversaciones fracasaron porque "los contras" pidieron cambios políticos inmediatos y radicales.

Después de esta reunión A. César se mostró especialmente duro en sus declaraciones, lo cual contrasta con su anterior optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo. Amenazó con no volver a Managua sin compromisos específicos



cos como encuestas de opinión pública, dar espacios en la televisión nacional a la oposición, establecer un sistema judicial independiente y liberar a todos los prisioneros. César alega que al final H. Ortega los amenazó con que si la guerra se reanudaba las balas también irían dirigidas contra los negociadores.

Esta postura de César es desconcertante porque antes del encuentro en Managua, él tuvo otro con un asesor del gobierno en Miami en el cual llegaron a seis puntos de lo que sería una democracia básica, entendiendo que la concretización de tales puntos se discutiría en el diálogo nacional. César prometió que al menos tres miembros del directorio, incluido él, firmarían un acuerdo basado en esos puntos, pero no estaba seguro de conseguir la anuencia de Bermúdez.

Después de la reunión de Managua, "los contras" fueron a Washington a pedir ayuda militar, administrada por la CIA. Advirtieron que no volverían a las conversaciones sin esa ayuda, pues alegan que es lo que les daría fuerza en la mesa de negociación. Después de reunirse con "los contras," Shultz salió diciendo que los sandinistas habían renegado de sus promesas de crear una democracia y que habían amenazado e intimidado a los negociadores; que éstos estuvieron sujetos a continuos abusos, que los trataron como prisioneros, que no les dieron permiso para reunirse con los dirigentes democráticos. Para el Secretario de Estado, los sandinistas sólo desean desarmar a "los contras" para consolidarse sin hacer cambios democráticos. Sin embargo, los funcionarios que apoyan la línea militar de "la contra" no tienen claro aún cómo proceder para darles la ayuda solicitada.

Los demócratas piensan que las conversaciones se han interrumpido por las peticiones irracionales de "la contra" y una certificación de Reagan diciendo lo contrario sería inválida. Los congresistas demócratas saben que el gobierno de Reagan no ha apoyado el proceso de Sapoá. Si el gobierno insiste en

una nueva pelea parlamentaria, los demócratas retrasarán el debate hasta septiembre para que aparezca como uno de los temas de la campaña presidencial y así subrayar mejor las diferencias entre ambos partidos sobre la política centroamericana.

El gobierno de Reagan provocó un mes de tensiones en la OEA a propósito de los 10 millones de dólares que debía entregar la AID para que aquella cumpliera con su función de verificación. La OEA, según el acuerdo inicial, debe inspeccionar los envíos humanitarios a "los contras" para verificar que no incluyen armas ni equipo militar. La AID comenzó a entregar la ayuda humanitaria unilateralmente a mediados de abril y ante la complacencia del gobierno de Honduras. También ha dejado caer suministros en los campamentos de la frontera y ha habido vuelos desde la Isla del Cisne (territorio hondureño), donde la CIA tiene un almacén de abastecimientos. Posteriormente, la AID comenzó a entregar dinero en efectivo a "los contras" en Honduras. La OEA ha criticado oficialmente estos procedimientos arbitrarios y prepotentes, contrarios a los firmados en Esquipulas y en Sapoá. La jerarquía católica hondureña, aceptando el pretexto del hambre de "los contras" presentado por la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, ha estado "supervisando" algunos de los envíos norteamericanos.

Shultz, ansioso de preservar a "los contras," pero consciente de no obtener la aprobación del congreso, espera hallar una alternativa diplomática que evite una nueva confrontación en el congreso y una nueva derrota política para su presidente. Para eso ha mandado a uno de sus mejores negociadores en armas nucleares al área y luego él mismo ha tratado de encontrar apoyo centroamericano, con muy poco éxito.

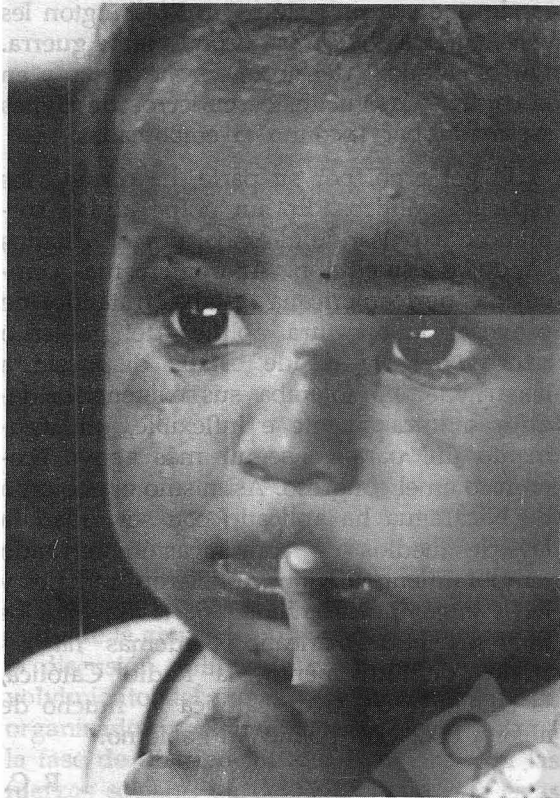
Funcionarios como Shultz y su cercano y desprestigiado colaborador E. Abrams son quienes han hecho fracasar las conversaciones y quienes han hecho surgir de nuevo

las divisiones existentes en "la contra," con lo cual, en lugar de fortalecerla, la han debilitado aún más.

Desde su fundación por la CIA en 1982, "la contra" ha padecido de una dirección pobre y de incoherencia política. La primera división apareció en el directorio cívico de cinco miembros todos ellos civiles. Supuestamente este directorio civil tiene el poder supremo en la Resistencia Nicaragüense, incluyendo las operaciones militares. Armados con este poder se presentaron en Sapoá y negociaron y firmaron el acuerdo inicial, pero de inmediato aparecieron las contradicciones internas. El ex-coronel somocista E. Bermúdez, máximo jefe militar, se opuso al acuerdo. Los funcionarios norteamericanos que han apoyado la línea militar de Bermúdez también se vieron sorprendidos.

Bermúdez desde el principio se opuso al acuerdo argumentando que sólo favorece al gobierno de Nicaragua. Bermúdez ha acusado a los sandinistas de negociar de mala fe, de ser prepotentes y totalitarios. La mayor parte de las dificultades han provenido de esta oposición al acuerdo inicial de la cual participan nicaragüenses exiliados quienes ven en peligro su permanencia en Miami y de jefes rebeldes quienes no participaron en la negociación de Sapoá.

La posición de Bermúdez y su grupo está respaldada por Reagan, Shultz, Abrams y otros funcionarios incapaces de aceptar la convivencia con el régimen de Managua al cual quieren convertir en una democracia occidental, es decir, haciendo desaparecer todo vestigio de sandinismo y de soberanía. "La contra" sólo ha buscado una tregua en las negociaciones para conseguir más apoyo militar, mientras que el gobierno ha estado buscando un cese del fuego definitivo. Por eso, desde que se firmó el acuerdo inicial no ha habido ningún otro. "Los contras" han llegado a las reuniones con instrucciones muy precisas de no firmar nada. Aparentemente estas órdenes las han recibido de Abrams, quien no



quiere quedar en ridículo otra vez, como cuando "los contras" firmaron a sus espaldas.

A lo largo de estas negociaciones aparece cómo "la contra" ha ido exigiendo cosas totalmente contrarias al acuerdo de Sapoá. El gobierno ha aceptado discutir la mayor parte de sus propuestas y remitir su resolución al diálogo nacional, una vez que los rebeldes se encuentren en las siete zonas establecidas. Esto fue lo firmado en Sapoá. Inaceptable para quienes quieren una solución militar porque supone la disolución de los rebeldes y su integración a la vida política, con lo cual tendrían la posibilidad de influir en el futuro del país a través de negociaciones y no de combates. El gobierno de Nicaragua, en la última sesión de alto nivel, ha ratificado y pedido apegarse al acuerdo ya firmado en Sapoá.

La hegemonía militar en "la contra" no se ha conseguido sin rupturas internas. Bermúdez

ha denunciado en público a Calero y, en privado, lo ha amenazado con hacer públicos sus malos manejos, si no deja de hacerle oposición dentro del movimiento. Pero Calero tienen su propia fuerza porque conoce los detalles de cómo altos funcionarios de la Casa Blanca, la CIA y de otras agencias han pasado por alto las restricciones del congreso para abastecer ilegalmente a "los contras" en el pasado. El directorio, dividido, ha querido ejercer su poder deshaciéndose de Bermúdez.

La división ha bajado hasta los jefes rebeldes y sus tropas. Bermúdez, pese a su propio respaldo, ha tenido que enfrentar un motín en Honduras a principios de mayo. Algunos disidentes hicieron pública su petición de que Bermúdez dejara el mando militar y lo acusaron de corrupto, ineficaz y dictatorial. El gobierno de Honduras, a petición de la embajada de Estados Unidos, deportó a Miami a siete disidentes, tres de ellos eran jefes militares. El 10 de mayo se sublevó un jefe rebelde que escapó a la deportación con todo su campamento (2 mil rebeldes) a 20 millas de la frontera de Nicaragua. La sublevación fue dominada con apoyo del ejército hondureño. Aparentemente este movimiento de oposición cuenta con el apoyo de otros jefes que se encuentran dentro de Nicaragua. Calero y otro miembro del directorio han apoyado y promovido estas rebeliones.

Cuando el directorio se aprestaba a destituir a Bermúdez, un agente de la CIA insultó a uno de sus miembros por teléfono. Este fue el último incidente de semanas de sobornos e intimidaciones de la CIA en orden a mantener a Bermúdez y su línea militar. La CIA ha tratado a los miembros del directorio como lo que en realidad son, sus empleados. Ella los escogió para el puesto y ella paga sus jugosos salarios.

Así ha caído la máscara quedando en evidencia que en los asuntos importantes las decisiones las toma el que paga. El directorio civil no tiene poder real sobre los militares y sus planes de guerra. Es una simple fachada



democrática para vender a los congresistas ingenuos el proyecto de la CIA y de "la contra." La fachada democrática ha caído y ha quedado al desnudo la realidad de "la contra:" una banda de exguardias somocistas financiada y dirigida por la CIA cuyo objetivo es derrocar a la revolución sandinista que el gobierno de Reagan no acepta por razones ideológicas y de seguridad (la presencia soviética).

Desde que la opción militar ha hecho valer sus intereses ha sido imposible llegar a un nuevo acuerdo. Así, Bermúdez primero mandó a sus delegados, quitando de la delegación a los jefes rebeldes que firmaron en Sapoá, más proclives a terminar con la guerra. Luego desplazó a Calero y puso a César, un supuesto mediador, al frente de la comisión negociadora, y él mismo se integró a la mesa de conversaciones.

A finales de junio la situación empezó a deteriorarse. "Los contras" no han querido aceptar las renovadas invitaciones del gobierno de Nicaragua para volver a sentarse en la mesa de negociaciones, quizás espe-

rando que sus protectores en Washington les consigan más dinero para continuar la guerra. En las ciudades del norte de Nicaragua y en la capital han vuelto los entierros de civiles asesinados por "la contra" en emboscadas.

El gobierno, por su parte, ha cerrado los espacios políticos. En un golpe audaz sorprendió expulsando al embajador de Estados Unidos y a su equipo. Aparentemente la embajada norteamericana estaba tratando de provocar la apertura política del gobierno para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar y si no toleraba sus exigencias, declararlo intransigente e inflexible, un argumento útil para conseguir más apoyo económico en el congreso. Asimismo el gobierno de Nicaragua ha aplicado con severidad la ley de medios de comunicación cerrando temporalmente algunos noticieros radiales y *La Prensa*, prácticamente portavoz de los intereses norteamericanos. Además ha cerrado "definitivamente" la Radio Católica, la cual tiene poco de católica y mucho de abierta oposición política al gobierno.

R. C.